

NOTA INFORMATIVA SOBRE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD EXTRANJEROS TUTELADAS POR LA DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA QUE RESIDEN EN UN CENTRO DE PROTECCIÓN

Toda persona menor de edad extranjera tutelada por la Diputación Foral de Gipuzkoa que reside en un centro de protección infantil tiene los siguientes derechos y obligaciones conforme a la normativa de protección infantil¹:

1) Derechos

- 1.1) RECIBIR INFORMACIÓN** en un idioma que entienda y en un lenguaje adaptado a su nivel y capacidad de entendimiento sobre cualquier actuación o procedimiento que esté llevando a cabo la Diputación Foral de Gipuzkoa en relación a su persona y que conduzca a la toma de una decisión o medida que le pueda afectar en su esfera personal, familiar o social. Esta información tendrá que referirse cuando menos a los siguientes aspectos: en qué consiste la actuación, procedimiento, decisión o medida, cuál es su finalidad, contenido y consecuencias.

Cuando se esté tramitando un procedimiento relativo a las **materias** que se indican a continuación, la persona menor de edad **tendrá derecho además** a recibir información sobre los siguientes aspectos:

1.1.1 Realización de pruebas médicas para determinar su edad:

- ◆ Forma en que se van a realizar las pruebas médicas.
- ◆ Posibilidad de ponerse en contacto con el Turno de Extranjería del Colegio de Abogados de Gipuzkoa (número de teléfono 656 793722), si desea solicitar asesoramiento o información jurídica independiente.

1.1.2. Asunción y cese de tutela y modificación de la edad señalada en la resolución de asunción de tutela:

- ◆ Posibilidad de ponerse en contacto con el Turno de Extranjería del Colegio de Abogados de Gipuzkoa (número de teléfono 656 793722), si desea solicitar asesoramiento o información jurídica independiente o la designación de un abogado de oficio para defender sus derechos ante el Juzgado de 1ª Instancia (Familia).

1.1.3. Procedimiento de repatriación al país de origen a fin de que sus padres/tutores/ o los servicios de protección infantil de su país de origen se hagan cargo de su atención:

- ◆ Con carácter previo a la realización del trámite de audiencia en el procedimiento, la posibilidad de ponerse en contacto con el Turno de Extranjería del Colegio de Abogados de Gipuzkoa (número de teléfono 656 793722) a fin de recibir asesoramiento o información jurídica independiente sobre este procedimiento.

¹ La normativa de protección en la que se contienen estos derechos y obligaciones se cita en el Anexo I.

- ◆ La necesidad de que esté asistido durante el trámite de audiencia y alegaciones de un abogado para lo cual deberá ponerse en contacto, si no dispone ya de un abogado, con el Turno de Extranjería del Colegio de Abogados de Gipuzkoa (número de teléfono 656 793722).
- ◆ La posibilidad de disponer de la asistencia y defensa de un abogado de oficio para impugnar ante la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa la resolución que acuerde su repatriación, para lo cual deberá ponerse en contacto, si no dispone ya de un abogado, con el Turno de Extranjería del Colegio de Abogados de Gipuzkoa (número de teléfono 656 793722).

1.2) SER OÍDA, es decir, ser escuchada, en cualquier actuación o procedimiento que esté llevando a cabo la Diputación Foral de Gipuzkoa en relación a su persona y que conduzca a una decisión o medida que afecte a su esfera personal, familiar o social.

Estas actuaciones o procedimientos pueden estar relacionados con las siguientes materias: realización de pruebas médicas para determinar su edad; asunción y cese de tutela y modificación de la edad señalada en la resolución de asunción de tutela; procedimiento de repatriación al país de origen a fin de que sus padres/tutores o los servicios de protección infantil de su país se hagan cargo de su atención; cambio de centro residencial de protección en el que se ejerce su guarda; procedimiento para proceder a su escolarización o inserción socio-laboral; procedimiento para tramitar la autorización de residencia y trabajo... etc.

1.3) DEFENDER SUS DERECHOS si no está conforme con las actuaciones, decisiones o medidas que la Diputación Foral lleva a cabo o acuerda en relación a su persona. Para ello puede ponerse en contacto o solicitar a sus educadores que le pongan en contacto, con el Turno de Extranjería del Colegio de Abogados de Gipuzkoa (número de teléfono 656 793722) a fin de recibir asesoramiento jurídico independiente y asistencia de un abogado de oficio que defienda sus derechos ante la Jurisdicción que corresponda.

2) Obligaciones

- 2.1. Respetar y cumplir las normas de funcionamiento y convivencia del centro residencial.
- 2.2. Respetar la dignidad y función de cuantas personas trabajen o vivan en el centro.
- 2.3. Desarrollar las actividades escolares, laborales o cualesquiera otras orientadas a su formación.
- 2.4. Hacer un uso adecuado de las instalaciones y de los medios materiales que se pongan a su disposición.
- 2.5. Cumplir las medidas educativas correctoras que le sean impuestas como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones, que habrán de tener contenido y función esencialmente educativo.
- 2.6. Someterse, de conformidad con lo establecido en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Información y Documentación Clínica, a los reconocimientos y pruebas médicas que sean precisos en garantía del derecho a la salud de la propia persona menor de edad y de las demás personas que viven o trabajan en el centro.
- 2.7. Hacerse cargo, cuando disponga de algún recurso económico, de las cuantías fijadas judicialmente correspondientes a la responsabilidad civil derivada de los expedientes de reforma.

ANEXO I Normativa de referencia
--

1) DERECHO A SER INFORMADO

◆ *Artículo 5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor*

1. Los menores tienen derecho a buscar, recibir y utilizar la información adecuada a su desarrollo.
2. Los padres o tutores y los poderes públicos velarán porque la información que reciban los menores sea veraz, plural y respetuosa con los principios constitucionales.
3. Las Administraciones públicas incentivarán la producción y difusión de materiales informativos y otros destinados a los menores, que respeten los criterios enunciados, al mismo tiempo que facilitarán el acceso de los menores a los servicios de información, documentación, bibliotecas y demás servicios culturales.

En particular, velarán porque los medios de comunicación en sus mensajes dirigidos a menores promuevan los valores de igualdad, solidaridad y respeto a los demás, eviten imágenes de violencia, explotación en las relaciones interpersonales o que reflejen un trato degradante o sexista.
4. Para garantizar que la publicidad o mensajes dirigidos a menores o emitidos en la programación dirigida a éstos, no les perjudique moral o físicamente, podrá ser regulada por normas especiales.
5. Sin perjuicio de otros sujetos legitimados, corresponde en todo caso al Ministerio Fiscal y a las Administraciones públicas competentes en materia de protección de menores el ejercicio de las acciones de cese y rectificación de publicidad ilícita.

2) DERECHO A SER OIDO

◆ *Artículo 16 de la Ley Vasca 3/2005, de 18 de febrero, de atención y protección a la infancia y adolescencia..*

- 1.– Los niños, niñas y adolescentes, cuando tengan suficiente juicio, tienen derecho a ser oídos tanto en el ámbito familiar como en cualquier procedimiento administrativo o judicial en que se encuentren directamente implicados y que conduzca a una decisión que afecte a su esfera personal, familiar o social. En todo caso, las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, velarán por que, en el ejercicio de este derecho, se respeten las necesarias condiciones de discreción, intimidad, seguridad, ausencia de presión y adecuación a la situación.
- 2.– Se garantizará que el niño, niña o adolescente pueda manifestar su opinión, por sí mismo o a través de la persona que designe para que le represente, cuando tenga suficiente juicio; no obstante, cuando ello no sea posible o no convenga al interés de la persona menor de edad, podrá conocerse su opinión por medio de sus representantes legales, siempre que no sean parte interesada ni tengan intereses contrapuestos a los de aquélla, o a través de otras personas que por su profesión o relación de especial confianza con la persona menor de edad puedan transmitir su opinión objetivamente. Este derecho deberá entenderse sin perjuicio de las previsiones especiales que se establezcan por ley a su respecto, como las recogidas en el artículo 18.2f) con referencia al derecho a otorgar o denegar el consentimiento en materia de intervenciones sanitarias.
- 3.– Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, velarán por que en los procedimientos directos con las personas menores de edad se utilice un idioma que entiendan y un lenguaje adaptado a su capacidad de entendimiento.

3) DERECHO A LA DEFENSA DE SUS DERECHOS

◆ **Artículo 17 de la Ley Vasca 3/2005, de 18 de febrero, de atención y protección a la infancia y adolescencia..**

1.– Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a defender sus derechos por sí mismos cuando lo permitan las leyes y, en todo caso, mediante sus representantes legales, siempre que éstos no sean parte interesada ni tengan intereses contrapuestos a los de la persona menor de edad, o a través de otras personas que por su profesión o relación de especial confianza puedan transmitir su opinión objetivamente. Las personas que ejerzan la patria potestad, tutela o guarda quedan obligadas a la defensa de tales derechos, y las administraciones públicas competentes a velar por su adecuado ejercicio y a poner en marcha los mecanismos necesarios para cumplir con esos objetivos.

2.– Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir de las administraciones públicas la asistencia adecuada para el efectivo ejercicio de sus derechos. A tal fin, pueden:

a) Solicitar la protección y tutela de la entidad pública competente.

b) Poner en conocimiento del ministerio fiscal las situaciones que consideren que atentan contra sus derechos con el fin de que éste promueva las acciones oportunas.

c) Plantear sus quejas ante la institución de la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia creada por el artículo 96 de la presente ley.

d) Solicitar de las administraciones públicas los recursos sociales disponibles.

e) Contar con defensa letrada en los procedimientos judiciales en que se vean implicados como acusados de haber cometido alguna infracción penal, defensa que será prestada a través del turno de oficio en caso de no designar letrado de confianza, así como disfrutar del derecho a la asistencia jurídica gratuita en los procedimientos de jurisdicción voluntaria relativos al ámbito contemplado en la presente ley, todo ello en los términos previstos en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, y en el Decreto 210/1996, de 30 de julio, de asistencia jurídica gratuita de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

3.– En el marco de los procedimientos judiciales, cuando se considere que la participación presencial de la persona menor de edad pudiera resultar traumática para ésta o pudiera hacer peligrar la prueba testifical, se procurará garantizar su participación por medios técnicos que eviten su presencia en la sala, y se solicitará, si se estimara necesario, la autorización del fiscal competente para que la persona menor de edad intervenga en el procedimiento conservando el anonimato.

4.– Las administraciones públicas tienen el deber de facilitar a las personas menores de edad el ejercicio de este derecho, asesorándoles y orientándoles en la tramitación de los procedimientos en los que se encuentren incurso. A tal efecto, el servicio de información dependiente del departamento competente en asuntos sociales regulado en el artículo 42 de la presente ley desarrollará funciones de orientación hacia las instancias más adecuadas para garantizar a los niños, niñas y adolescentes la defensa de sus derechos.

En aquellos casos en los que pudiera existir un conflicto de intereses entre la persona menor de edad y la entidad pública bajo cuya guarda o tutela se encuentre, deberá ponerse en conocimiento de la persona menor de edad su derecho a contar con un defensor judicial en los términos previstos en la legislación vigente.

5.– La actuación de las administraciones públicas será prioritaria en los casos de amenaza y coacción, de manera que la administración pública competente actuará de oficio ante cualquier indicio de estas situaciones.